



El coche oficial

Al tiempo que en Catalunya surgía la polémica por los extras del Audi 8 del presidente del Parlament, la secretaria general del Partido Socialista de Galicia, Mar Barcón, ha salido al paso del alto coste del vehículo de presidente de la Xunta. La respuesta de esta dirigente ha sido clara: “El problema del PP es que ellos piensan que son los únicos que tienen derecho a coche oficial”. No tengo claro que entre los derechos de los políticos figure el subirse a un automóvil pagado con cargo a los presupuestos. De la misma manera que se puede entender que las primeras autoridades se trasladen en coche oficial para acudir a actos igualmente oficiales, cuesta de aceptar que el automóvil sea algo así como un pago en especies suplementario para el político. Por otra parte, nuestros dirigentes deberían ser los primeros en entender que es más útil pisar la calle que intentar ver la realidad desde los cristales tintados del vehículo institucional.

En España se usa, pero sobre todo se abusa, del coche oficial, hasta el punto de que cualquier mercachifle

España dispone de más autos institucionales que EE.UU., pero queda lejos de la flota de Italia

considera no sólo que le toca, sino que se lo merece. La prueba es que se calcula que existen 30.000 automóviles pagados con nuestros impuestos, con sus correspondientes chóferes, para el uso de políticos con algún cargo. Eso supone que en nuestro país se compran tantos vehículos para gestores de la cosa pública como en todo Estados Unidos, con la corrección de que su población resulta seis veces la española. El único pobre consuelo es que Italia ostenta el liderazgo en este ámbito, pues se estima que pasan del medio millón los automóviles que pagan las diferentes instituciones para sus ilustres inquilinos. La prensa italiana ha denunciado en más de una ocasión semejante dislate, habiendo llegado a la conclusión de que, si salieran en comitiva todos juntos desde Roma, la riada de vehículos llegaría a 400 kilómetros de Moscú.

Los altos cargos del Govern que los utilizan son 202, que no es una cifra exagerada, pero con toda seguridad podría reducirse. El problema es que la multiplicidad de organismos (ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, Parlament y entes dependientes de la administración catalana) multiplica el número hasta cifras un tanto ridículas por su volumen.

De vez en cuando aparece la noticia de algún político, como es el caso del ministro Miguel Sebastián, que decide ir en metro a su despacho o al Congreso en lugar de acomodarse en el asiento posterior del coche oficial. O como Antoni Balmón, alcalde de Cornellà, que adquirió un monovolumen para que sus concejales se desplacen en caso de estricta necesidad institucional. Caminar parece que denigre a los políticos, pisar la calle se diría que les incomoda. Olvidando que es así como se puede reconocer la cara de los electores y como pueden llegarse a conocer sus problemas.●